

**El incierto futuro
de los partidos políticos argentinos**
Edgardo Mocca

Edgardo Mocca es Profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, y miembro del Club de Cultura Socialista.
e-mail: emocca@fibertel.com.ar

Resumen

La inédita crisis vivida por la Argentina entre fines de 2001 y comienzos de 2002 constituyó una seria amenaza a la estabilidad democrática del país. El artículo se concentra en las consecuencias que trajo aparejada la crisis para el sistema de partidos argentino. Analiza cómo, contrariamente a la mayoría de los pronósticos, los partidos existentes no implosionaron bajo los efectos del múltiple derrumbe. Asimismo, se procura analizar los cambios graduales que se han ido produciendo en la escena política, particularmente como consecuencia de las novedades introducidas por la gestión del presidente Kirchner. Se esboza una hipótesis sobre las perspectivas de desarrollo del sistema de partidos a partir de las elecciones de octubre de este año. (El artículo se escribió con anterioridad a esos comicios)

Summary

A serious challenge to the democratic stability in the country was built by the unpredictable crisis lived between December, 2001 and the beginning of 2002. The Article is focused on the consequences of the crisis for the Argentinean party system. It analyzes how, against any prediction, the parties didn't collapsed under the multiple effects provoked by the crisis. Therefore, the Article pretend analyzes the gradual changes that have been appearing in the political scene, particularly as consequence of the policies introduced by the current President Kirchner's administration. The author formulates an hypothesis related to the perspective of development of the party system since the elections of October 2005. (The Article was written before last electoral results)

Las elecciones de renovación parlamentaria del próximo 23 de octubre pueden marcar un punto de inflexión en el proceso de relegitimación de las instituciones democráticas, después de la crisis de 2001, la más intensa por la que atravesara la Argentina contemporánea.

La formulación de una evaluación consistente del actual estado de la democracia en nuestro país exige un balance de su conflictiva historia reciente, de los discursos que circularon en este último período y la contrastación entre los diagnósticos y pronósticos predominantes desde el estallido con el escenario real ante el que nos encontramos. Fuera de esa referencia se corre el riesgo de simplificar el juicio o de quedar prisionero de datos y acontecimientos aisladamente considerados.

Los dos años de gobierno de Kirchner han sido una etapa de recuperación de un centro de autoridad política y de solución satisfactoria de algunos de los puntos más urgentes de la agenda de un país postrado y al borde de su disolución. Lejos estamos, sin embargo, del país normal que propugna la consigna del elenco gobernante. El mejoramiento de los principales indicadores económicos (crecimiento, superávit fiscal, recaudación impositiva) no puede ocultar las amenazas de mediano plazo que constituyen las insuficiencias de la inversión productiva, los peligros de inflación y la irresuelta cuestión de la negociación con varias de las empresas concesionarias de los servicios privatizados durante la década del noventa; el apreciable mejoramiento de la situación del empleo y la disminución de los índices de pobreza e indigencia se inscribe en el marco de una situación social de gravedad inédita en la Argentina. Por otro lado, el sostenimiento de la legitimidad electoral y la convivencia política pacífica y civilizada, no pueden ocultar la subsistencia de una profunda brecha entre la sociedad y la política, así como la persistencia de prácticas institucionales que, nacidas al calor de graves emergencias, se han instalado como modos estables de funcionamiento del poder en el límite de la legalidad constitucional, fenómeno que el politólogo argentino Hugo Quiroga ha dado en llamar la «emergencia permanente».¹ En última instancia, después de haber salido de las profundidades del abismo económico, social y político-institucional, el país no ha terminado de definir un rumbo estable que lo haga confiable ante el mundo y ante sus propios ciudadanos.

El múltiple derrumbe de hace cuatro años generó pronósticos agoreros y esperanzas refundacionales. El curso de los acontecimientos no validó ni a los profetas de la disolución nacional ni a los augures de un nuevo comienzo histórico surgido de las cenizas de la vieja política. Más bien, la política argentina es una amalgama

¹ Hugo Quiroga, *La Argentina en emergencia permanente*, Buenos Aires, Edhasa, 2005.

de continuidades y rupturas, de procesos de largo plazo que se sostienen y permanecen e insinuaciones de cambios socioculturales y políticos profundos; el ciclo que abrió la caída de De la Rúa en 2001 permanece abierto, aunque hayan sido superadas sus facetas más explosivas y destructoras. Superada la incertidumbre sobre la subsistencia de la comunidad política como tal, sobrevive el interrogante sobre el grado de renovación que alcanzará la convivencia social y política de los argentinos.

De entre la multiplicidad de caminos que se abren del interrogante así formulado, este trabajo se propone pensar, a la luz de los acontecimientos de este convulsivo período, el futuro del sistema político argentino. La pregunta por el porvenir de los partidos políticos, envueltos en el descrédito colectivo, y por el sistema de sus interrelaciones es crucial para la reflexión sobre las perspectivas de la democracia argentina. La previsibilidad política es un valor que la Argentina no pudo alcanzar durante una gran parte del siglo XX y que, una vez recuperada en 1983 la institucionalidad democrática, se vio sacudida recurrentemente por el vendaval de las crisis.

En febrero de 2002, el editorial principal del diario *La Nación* (uno de los más importantes e influyentes del país) daba cuenta del fenómeno de las «asambleas populares» y alertaba sobre el peligro de que esos grupos devinieran en una variante argentina de los soviets, degeneraran en el ejercicio de la justicia por mano propia y llegaran a constituirse en un factor de «perturbación institucional».² Las asambleas habían surgido en Buenos Aires y en otros conglomerados urbanos como formas organizativas casi totalmente espontáneas de la sublevación popular desarrollada en las críticas horas finales del gobierno de De la Rúa, a fines de 2001. Eran la escenificación callejera del pronunciamiento electoral de octubre de ese mismo año cuando más de 4.500.000 ciudadanos, uno de cada cuatro de quienes concurrieron a las urnas, votaron en blanco o anularon deliberadamente su voto. La inédita conmoción social paralela a los saqueos de supermercados en el Conurbano bonaerense se desarrollaba contra el telón de fondo del estallido del plan de convertibilidad, la ruptura general de los contratos y un inédito deterioro de los indicadores sociales del país. En esos días, una investigación realizada por el PNUD en la Argentina, mostraba que los partidos políticos ocupaban el último lugar de la confianza pública en las instituciones: 94% de las personas entrevistadas manifestaban tener poca o ninguna confianza en los partidos políticos.³ La

² Editorial de *La Nación*, 14/02/2002.

fos de la política, Informe sobre democracia en la Argentina,

³ Juan Carlos Portantiero, Gerardo Adrogué, Agustina Grigera, Buenos Aires, PNUD, 2002.
Edgardo Mocca, Ana M. Mustapic y Osvaldo Pedroso, *Desa-*

indignación contra los políticos se manifestaba en su modo extremo a través de los «escraches» que consistían en denunciar la presencia de un político en algún lugar público y repudiarlo a viva voz, sin que faltaran episodios de violencia física.

El clima de ideas de esos días acompañaba activamente la furia popular. Desde los más diversos sitios del arco ideológico se repudiaba a los partidos: desde la derecha se promovía una drástica disminución numérica del Congreso, sin reparo alguno en el carácter inconstitucional de tal medida. Fue objeto de comentarios interesados un artículo firmado por Rudi Dornbusch en el *Financial Times* en el que se proponía que Argentina cediera el control de su sistema monetario, fiscal y de gestión de sus activos por un largo período a un comité de banqueros de países centrales, tomando como modelo la experiencia de Austria después de la segunda guerra mundial.⁴ Desde diferentes sectores de izquierda se auspiciaban reformas políticas con sesgo directista y unificadas conceptualmente por el repudio explícito de la dirigencia política en su conjunto.⁵

Se había llegado así al punto más bajo del prestigio social de los partidos políticos, al punto de llegada de una larga trayectoria de deterioro desde que en 1983, en los meses anteriores a las primeras elecciones democráticas después de la dictadura militar emergida siete años antes, se registraban casi 4 millones de nuevas afiliaciones a los partidos políticos. Excede los propósitos de este trabajo el examen en profundidad de las causas que fueron mellando paulatinamente el prestigio de los partidos políticos argentinos. De las múltiples perspectivas analíticas de este itinerario, resulta particularmente útil la que señala las dificultades para la gestión de la crisis económica, cuya profundidad y carácter estructural fue marcadamente subestimada en los comienzos de la recuperación democrática.⁶ Las enormes dificultades para establecer una agenda cooperativa entre las dos grandes fuerzas políticas que redujera la intensidad del conflicto expresivo generaron una escena en la que peronistas y radicales competían para hacer iguales políticas desde el gobierno y obstruirse desde la oposición.⁷ La emergencia fue el modo de existir de nuestra democracia durante

⁴ Ver Julio Nudler, *La candidata de Dornbusch*, en: *Página 12*, 20/07/2002.

⁵ Como ejemplo de este clima de ideas, puede citarse la circulación a mediados de 2002 de una «Carta abierta de artistas e intelectuales argentinos por una asamblea constituyente», que se pronunciaba «a favor de cambios profundos que terminen con la ineficacia, la cobardía y la deshonestidad de nuestros actuales representantes, que deliberan y gobiernan en nuestro nombre pero en contra de nuestros intereses» y culminaba proponiendo «un plebiscito vinculante, abierto y libre, ga-

rantizado y controlado por organismos internacionales, para elegir una Convención Constituyente que establezca las bases de un nuevo sistema democrático, participativo y con firmes controles ciudadanos en el manejo de los asuntos públicos» (puede verse en el sitio web *Bazaramericano.com*).

⁶ Juan Carlos Torre, «El gobierno de la democracia en tiempos difíciles», en: *Revista de Estudios Políticos, Nueva Época*, Madrid, 1991.

⁷ Vicente Palermo, «El enemigo del pueblo», en: Marcos Novaro (comp.), *El derrumbe político*, Buenos Aires, Norma, 2002.

largos períodos a partir de la crisis hiperinflacionaria: decretos de necesidad y urgencia y, en general, una alta concentración de los recursos decisorios en el Poder Ejecutivo fueron vaciando la escena política de todo contenido deliberativo.

Uno de los núcleos discursivos que acompañaron esta pérdida de significado del parlamento y de la deliberación política fue la retórica antipolítica.⁸ Menem hizo de ese recurso uno de los núcleos discursivos de su legitimación: había que acelerar los cambios, los únicos cambios concebibles —que eran los que él ponía en práctica— contra los profesionales de la obstrucción, contra la máquina de impedir, es decir contra el Congreso y los partidos políticos. Vale aclarar que la ofensiva contra la política no ha sido en estos años patrimonio exclusivo de la derecha, más allá de su funcionalidad para el dogma del «pensamiento único» neoconservador. La oposición de centroizquierda que experimentó un vertiginoso crecimiento entre 1993 y 1999, bajo la dirección de Chacho Álvarez, fundador y principal dirigente del Frente Grande y luego del Frepaso, tuvo frente al sistema de partidos existente en la Argentina una posición ambivalente. Por un lado, se instaló en un territorio poco frecuentado por la izquierda, el de una fuerte vocación republicana; apenas promovido al centro de la escena política por el magnífico desempeño electoral en los comicios para la reforma constitucional de 1994, Álvarez rechazó y enfrentó las posturas testimoniales que pretendían el retiro de los convencionales frentistas ante «el fraude perpetrado por los partidos tradicionales», participó activamente en el debate constituyente y aportó de modo importante a su contenido. Al mismo tiempo, la agitación de la necesidad de una «nueva política» no siempre dejaba claro la forma institucional que ésta debía adoptar; la insistencia en constituir una alternativa al bipartidismo tradicional no siempre se traducía en la necesidad de un reagrupamiento y una reconfiguración del sistema de partidos: con frecuencia se utilizaba en clave populista, como modo de sintonizar con una atmósfera colectiva de rechazo a los partidos políticos y de establecer un clivaje prepolítico entre honestos y corruptos. Mucho antes de que en 2000 se revelara la existencia de graves casos de corrupción en el gobierno y, particularmente en el Senado de la Nación, en oportunidad de los presuntos pagos de sobornos por la aprobación de la ley sindical, el prestigio de la dirigencia política (la «corporación política» empezó a llamársela) había entrado en un proceso de franca erosión: su impotencia en el manejo de la crisis alimentada por su comportamiento no cooperativo y la cultura antipolítica habían iniciado el camino de su declinación.

⁸ Edgardo Mocca «Defensa de la política (en tiempos de crisis)», en: Marcos Novaro (comp.), *El derrumbe político*, Buenos Aires, Norma, 2002.

DEL COLAPSO A LA SALIDA ELECTORAL

Después de la renuncia anticipada de De la Rúa, el 20 de diciembre de 2001 se desarrolló una convulsiva saga de soluciones fallidas al vacío presidencial; el caudillo de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá —designado en primera instancia por la Asamblea Legislativa— renuncia al cabo de una semana, cuando la mayoría de los gobernadores provinciales le niega el apoyo. A principios de 2003 asume el ex gobernador y entonces senador por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde; durante varios meses el fantasma de la ingobernabilidad recorrió el país, de la mano del caos económico desatado por la brusca y espectacular devaluación del peso y la conversión a la moneda nacional de los depósitos bancarios y deudas establecidas en dólares durante la vigencia de la convertibilidad del peso en dólar. La decisión por parte de Duhalde de acortar su propio mandato, cuya conclusión estaba prevista en diciembre de 2003, adoptada después de que la represión policial causara dos muertos en una manifestación piquetera, resultó una de las claves del éxito de la transición piloteada por el caudillo bonaerense. La perspectiva de una salida electoral próxima y cargada de incertidumbre en su resultado estimuló conductas cooperativas por parte de los principales actores políticos de aquellos días.

Conviene resaltar el hecho de que la democracia argentina haya encontrado en aquellos aciagos momentos recursos político-institucionales que le permitieran sobrevivir en tan precarias y azarosas condiciones. Sin duda, la no existencia de fuerzas radicalmente desleales al sistema democrático con algún apoyo social relevante resultó una condición decisiva para ese logro; pero es necesario valorar que aun en medio del descalabro social y del virtual vacío de poder, la ciudadanía argentina mostraba una importante reserva de fidelidad al régimen democrático.⁹ La paulatina estabilización económica y una incipiente recuperación de los indicadores, después de más de tres años continuados de recesión fueron también un factor favorable a una precaria normalización política.

Cuando se abre la etapa electoral, sale a la luz el cambio en la situación de los partidos políticos. Las encuestas preelectorales empezaban a mostrar un cuadro de acentuada fragmentación e incertidumbre, junto con una marcada personalización de la oferta, en detrimento del lugar central que los partidos políticos habían ocupado en esta materia desde 1983. El radicalismo ya no formaba parte de las opciones electorales centrales; su lugar lo ocuparon dos candidatos surgidos de sus filas: Ricardo López Murphy y Elisa Carrió, al frente de sendas nuevas agrupaciones de centroderecha y centroizquierda. Pero el drama central se desarrollaba

⁹ Juan Carlos Portantiero, Gerardo Adrogué, Agustina Grigera, Edgardo Mocca, Ana M. Mustapic y Osvaldo Pedroso, *op.cit.*

en el peronismo, alrededor de la reaparición en un primer plano de las expectativas de triunfo electoral de Carlos Menem, que ejerciera la presidencia entre 1989 y 1999. El presidente Duhalde se vio obligado a ensayar diferentes alternativas en el interior del Partido Justicialista para bloquear su triunfo. Una maniobra situada en la frontera misma de la legalidad permitirá al justicialismo sortear su crisis y a Duhalde enfrentar victoriosamente el regreso triunfal de Menem: el congreso partidario decide no resolver por elecciones internas la candidatura justicialista y habilita a los tres precandidatos para que se presenten en las elecciones, no sin disponer que no puedan utilizar su sigla y sus símbolos a esos efectos. La elección presidencial de abril de 2003 fue, en la práctica, una disputa entre figuras, coaliciones y agrupaciones creadas para sostener circunstanciales candidaturas más que una competencia entre partidos políticos.

Después del fracaso de otras tentativas, Duhalde decide apoyar la candidatura del entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner quien, en aquel momento, estaba estructurando un frente de centroizquierda al margen de la estructura partidaria. Segundo detrás de Menem en la primera vuelta, con un exiguo 22% de los votos, Kirchner concentra rápidamente a su alrededor la expectativa de una ocasional y abrumadora mayoría de electores para la segunda vuelta, según todos los sondeos electorales. En esas condiciones, Menem produce lo que puede considerarse el acto político más desleal de estos veinte años de democracia al retirarse del ballotage, con la intención de restar legitimidad de origen al nuevo presidente, quien había hecho de la lucha contra el «pasado menemista» el eje central de su campaña proselitista.

Por caminos sinuosos y no muy ortodoxos, constitucionalmente hablando, la política argentina preservaría entonces uno de sus capitales más preciados, la legitimidad electoral. La reforma constitucional aprobada en 1994 había consagrado un conjunto de modificaciones en el capítulo dedicado al modo de conformación y ejercicio de la autoridad política, inspiradas en el propósito de morigerar el presidencialismo, darle más estabilidad al sistema democrático y facilitar la cooperación entre las fuerzas políticas. La principal de las nuevas figuras, la del Jefe de Gabinete, aparecía como una prenda de negociación que en épocas de crisis de gobernabilidad pudiera ser utilizada para producir cambios en la fórmula de gobierno sin el riesgo de la quiebra institucional. En la práctica, el régimen político argentino acentuó sus rasgos presidencialistas y la solución de la crisis de 2001 adoptó la forma de un «parlamentarismo de hecho», sin que el sitio institucional del Jefe de Gabinete desempeñara rol alguno. El régimen político argentino pendula entre un presidencialismo decisionista ejercido en la lógica de la emergencia per-

manente, cuando la popularidad del presidente es alta y un parlamentarismo que expresa la compleja y fragmentada estructura federal, en épocas de crisis y deterioro de la figura presidencial.¹⁰

LAS NOVEDADES POLÍTICAS DEL GOBIERNO DE KIRCHNER

El exiguo porcentaje de votos obtenidos en la primera vuelta electoral, la no realización del ballottage por el abandono de Menem, el peso decisivo del apoyo de Duhalde y una situación socioeconómica de extrema vulnerabilidad, aunque en vías de recuperación hacían prever la apertura de un período de debilidad presidencial. Esa presunción constituía entonces un sentido común predominante entre comunicadores y analistas políticos. Sin embargo, desde sus primeros días como presidente Kirchner adoptó un estilo enérgico de decisiones y construyó una agenda política que fortaleció el respaldo ciudadano a su gestión. La intervención al PAMI —la obra social de los jubilados, considerada un nicho de corrupción— la depuración de la cúpula del Ejército, el impulso de la renovación de la Corte Suprema sobre la base de un método más transparente que recorta las propias facultades presidenciales, la promoción de la investigación del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar, así como una posición negociadora firme y pragmática ante los organismos internacionales de crédito y las empresas de servicios privatizadas fueron algunas de las iniciativas más salientes de la primera etapa; la posterior negociación exitosa de la deuda externa que permitió al país salir de la situación de cesación de pagos afirmaría la fortaleza del presidente ante la opinión pública. Es esta relación con la ciudadanía —una relación más bien virtual que se expresa, ante todo a través de las encuestas de opinión— lo que permitió a Kirchner administrar las tensiones con el propio partido de gobierno y, particularmente, con el sector afín a Eduardo Duhalde.

Curiosamente, al cabo de un breve período inicial de gobierno, la crítica al gobierno de Kirchner experimentó un desplazamiento: de cuestionar su condición de presidente débil y con «poder prestado» se pasó a poner en el centro de la discusión el problema del hegemonismo en la práctica de gobierno. Se trata de un término con una gran capacidad de sensibilización en un país como el nuestro históricamente atravesado por proyectos hegemónicos que, aun frustrados, cimentaron una muy poderosa tradición política de intolerancia y autoritarismo.

¹⁰ Edgardo Mocca, *Las reformas políticas en el laboratorio implacable de la crisis*, en: *Encrucijadas*, revista de la Universidad de Buenos Aires, septiembre, 2004.

Ahora bien, la idea de hegemonía tiene significados diferentes según se la utilice en relación al régimen político-institucional, el rumbo estratégico del gobierno o los estilos con los que ese rumbo se transita. La presencia de un «régimen de partido hegemónico» presupone la existencia de una fuerza política que, por la vía de la manipulación, el fraude y/o la violencia logra acaparar todos los resortes del poder o la parte fundamental de ellos, vulnerando la división de poderes, vaciando de recursos a la oposición y bloqueando de modo absoluto la alternancia en el gobierno; no alcanza para que pueda hablarse de «partido hegemónico» que una de las fuerzas que compiten electoralmente triunfe de manera repetida en la lucha electoral (en ese caso puede hablarse de un «partido predominante») sino que hace falta que ese triunfo pueda darse por descontado, dado el monopolio de recursos antes mencionado.¹¹ No es este el caso del gobierno que asumió en 2003. Hegemonía, en la matriz gramsciana del término, alude a la pretensión de un determinado grupo político de hacer que sus ideas u orientaciones políticas se transformen en un sentido común de la sociedad. En este punto, se puede reconocer que ha habido un cambio considerable entre las ideas neoliberales dominantes en los años noventa y el actual clima de ideas en el que –aun sin la existencia de un claro paradigma alternativo– predomina lo que podría caracterizarse como «neodesarrollismo» en el sentido de la revalorización del rol del Estado y la necesidad de un rumbo productivo con mayores márgenes de autonomía nacional. Lo importante es que estos cambios de época se desarrollen, como de hecho lo hicieron en la Argentina, sin menoscabo de la expresión de sectores políticos circunstancialmente minoritarios. Por último está la cuestión de los estilos; es indudable que en esta materia el actual gobierno reproduce una matriz decisionista, en la que el rol del Congreso aparece desdibujado. Se trata de una práctica sistémica que se desarrolla sin solución de continuidad desde la crisis hiperinflacionaria de 1989 hasta nuestros días y que aparece como un interrogante para el futuro de la calidad democrática en el país; pero no sería justo atribuir la concentración presidencialista de las decisiones a un rasgo exclusivo del actual presidente, aunque éste haga un uso ostensible de este recurso. De manera que la cuestión del hegemonismo tiene más relación con una legítima esgrima polémica en relación a los estilos presidenciales que a la insinuación de un riesgo serio para la institucionalidad democrática en el país.¹²

¹¹ Giovanni Sartori, *Partidos y sistemas de partidos*, Madrid, Alianza, 1992.

¹² Edgardo Mocca *¿Hay un rumbo hegemónico?*, en: *Clarín*, 28/08/2003.

EL FUTURO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Con frecuencia, la reflexión sobre la crisis de los partidos políticos suele discurrir con abstracción de las transformaciones que vienen atravesando los modos de representación en todas las democracias del mundo. Bernard Manin interpreta el fenómeno como «metamorfosis de la representación»,¹³ puesto que el término «crisis» pierde sentido cuando se lo pretende utilizar para dar cuenta de fenómenos relativamente estabilizados; sin embargo, como veremos, en nuestro país hemos asistido efectivamente a una profunda crisis dentro de un fenómeno de mutación común a la vida política en todo el mundo.

La época de oro de los partidos ha quedado en el pasado. Una amplia e influente corriente de estudiosos sostiene que la función representativa de los partidos hunde sus raíces en una época lejana y muy diferente a las que nos toca vivir.¹⁴ El debilitamiento de los recursos políticos propios de los Estados nacionales, la erosión de las grandes identidades construidas en torno a la relación con el mundo del trabajo, y las enormes transformaciones en el mundo cotidiano de la población de las demandas contemporáneas, aparecen como premisas de una creciente desafección y descontento creciente frente a los partidos políticos. Los partidos ven reducirse el número de sus afiliados, incluso en los países con más larga y profunda tradición partidaria; su militancia activa disminuye paralelamente al crecimiento del abstencionismo electoral. Sus funciones «tradicionales» se debilitan. Ya no son herramientas insustituibles para la integración y movilización de la ciudadanía; la expresión de intereses tiene en las democracias actuales múltiples canales como diversos movimientos independientes y los medios de comunicación masiva. La formulación de los programas políticos de gobierno pasa a ser, cada vez más, patrimonio de expertos y de organizaciones de carácter no político. Tampoco tienen el monopolio como agencia de reclutamiento de líderes: los medios de comunicación y las encuestas de opinión como factor de relevamiento y construcción de la opinión pública facilitan la rápida emergencia de figuras políticas ajenas al *cursus honorum* partidario.¹⁵

A pesar de todas las transformaciones sumariamente enunciadas, los partidos conservan un rol en el que siguen siendo fundamentales y no tienen rivales a la vista: se trata del rol procedimental de organización de los parlamentos y los gobiernos. Los partidos son instituciones que organizan el acceso al gobierno y que lo ejercen; son, en ese sentido, garantes de la existencia de una democracia plural.

¹³ Bernard Manin, «Metamorfosis de la representación», en: *¿Qué queda de la representación política?*, Caracas, CLACSO, Nueva Sociedad, 1992.

¹⁴ Mauro Calise, *Il partito personale*, Laterza, Roma-Bari, 2000.

¹⁵ Peter Mair, *¿Tienen un futuro los partidos políticos?*, Roma, Asociación CRS/Democratici di Sinistra, 1999.

Replegados en ese rol, los partidos actuales han dejado de ser mediadores privilegiados de la relación entre sociedad civil y Estado para ser virtualmente absorbidos por este último. Es lo que Mair llama partidos-cartel, «caracterizados por la interpenetración entre partido y Estado y por un patrón de colusión interpartidaria».¹⁶ En el contexto de la hegemonía de una concepción tecnocrática de la administración de lo público, esta nueva configuración aparece inevitablemente asociada a un comportamiento corporativo y a un vaciamiento del sentido de las instituciones partidarias. Sin embargo, también es posible pensar que los partidos interpenetrados como están con la gestión estatal, tienen ante sí un desafío fundamental: el de constituirse en garantes de un sistema de alternativas efectivas de políticas públicas, capaces de señalar rumbos estratégicos y de hacerse responsables por el resultado de su puesta en práctica. Claro que eso presupone un viraje hacia un nuevo vínculo con la sociedad civil, y hacia una recuperación de las capacidades autónomas de la política.

De manera que si la pregunta por el futuro de los partidos políticos en Argentina remitiera al modelo de las grandes fuerzas expresivas de poderosas identidades político-culturales que dio en llamarse «partidos de masas», podría cerrarse rápidamente el tema con una respuesta negativa. Por otro lado, el tipo de partidos que ahora parecemos añorar, fuertemente implantado en términos ideológicos y programáticos y autodefinido por la representación de una clase en particular, nunca floreció en nuestro país. Los grandes partidos de la Argentina moderna, a diferencia por ejemplo de sus pares chilenos, no se constituyeron como partidos ideológicos o de clase sino como grandes movimientos pluriclasistas, con pretensiones de representar al conjunto de la nación. La institucionalización democrática del más influyente de ellos, el justicialismo, es, por otro lado, un evento relativamente reciente. De modo que la figura del aparato de burócratas profesionales y la masa de militantes orgánicamente encuadrados y sólidamente expresados por los principios y la ideología del partido no merece nostalgia alguna porque nunca existió en plenitud en nuestro país, por lo menos entre las fuerzas realmente influyentes en la política nacional.

En los veinte años de democracia, los dos grandes partidos —justicialista y radical— que ordenaron el funcionamiento del sistema político durante los breves e inestables períodos democráticos de la segunda mitad del siglo XX, se deslizaron en la dirección de estructuras esencialmente sostenidas por los recursos de los diversos niveles e instancias del Estado. Su organización reproduce de modo bas-

¹⁶ Peter Mair, *Party system changes, approaches and interpretations*, Oxford, Clarendon Press, 1997.

tante aproximado la organización del gobierno, sus cuadros son de modo ampliamente predominante funcionarios o ex funcionarios del Estado. De los principios de identificación que conformaron su personalidad histórica quedaron vagas referencias míticas, utilizadas con frecuencia para fundamentar las más diversas conductas políticas. Lo que era un eclipse gradual de su prestigio social, se convirtió en los últimos años en un deterioro galopante hasta llegar los días del repudio popular más encendido y generalizado que registra nuestra historia democrática.

Sin embargo, no hemos asistido a una implosión del sistema de partidos políticos en Argentina. Desplazados de la escena, según hemos visto, en la elección presidencial, las fuerzas «tradicionales» de la política argentina reaparecen en las elecciones provinciales que se desarrollaron a lo largo de 2003 y consiguen una continuidad en la composición de ambas cámaras legislativas, realmente llamativa después del terremoto social y político experimentado por el país. Estamos, pues, ante un escenario de cambios y continuidades en el sistema de partidos políticos; el radicalismo no ha podido recomponer, después del dramático desenlace del gobierno de De la Rúa, un liderazgo nacional que lo coloque en condiciones de constituirse en alternativa de gobierno. Conserva el gobierno en cinco provincias y es la segunda fuerza en ambas cámaras del Congreso.¹⁷

El paisaje político se ha diversificado con la emergencia y crecimiento de nuevos liderazgos. En la centroderecha, las figuras del empresario Mauricio Macri y el ex funcionario radical, Ricardo López Murphy, a quienes podría sumarse, entre otros, el gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, parecen insinuar para ese sector un espacio de amplitud inédita en la historia reciente de nuestro país. La centrozquierda está atravesada por un debate intenso alrededor de la actitud a tomar ante el gobierno de Kirchner: mientras Elisa Carrió, al frente del ARI (Alternativa por una República Igualitaria) desarrolla un discurso fuertemente antagónico frente al gobierno, otras figuras relevantes como el dirigente socialista de la provincia de Santa Fe, Herme Binner, el intendente de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, Luis Juez y el intendente de la ciudad bonaerense de Morón, Martín Sabattella, entre otros, sostienen una posición más matizada que incluye apoyos y críticas; un número considerable de cuadros de este sector, provenientes en lo fundamental del Frepaso —fuerza fundada por Carlos Chacho Álvarez y que cogobernara en la administración de De la Rúa— se ha sumado a los equipos de gobierno sin conformar, hasta el momento, una fuerza política propia de alguna relevancia.

¹⁷ Edgardo Mocca, «Los partidos políticos entre el derrumbe y la oportunidad», en: Isidoro Cheresky y Jean Michel Blanquet, *¿Qué cambió en la política argentina?*, Rosario, Homo Sapiens, 2004.

EL ENIGMA PERONISTA

¿Es el gobierno de Kirchner un gobierno peronista más o señala el comienzo de un nuevo sistema de partidos políticos en Argentina? Como hemos visto el actual presidente alcanza la victoria electoral con el apoyo decisivo del peronismo bonaerense, encabezado por el entonces presidente Duhalde, después de haber lanzado su candidatura por fuera de la estructura justicialista y al frente de un conglomerado de centroizquierda. Una vez en el gobierno pone en acción un conjunto de iniciativas que forman parte, en términos genéricos, del repertorio ideal del progresismo argentino; hasta se incluyen en esa agenda temas como la reapertura de los juicios a un conjunto de jefes militares de la última dictadura que habían desaparecido del primer plano en el discurso político de este sector. El presidente ha construido su retórica política en torno a un eje central: la superación del pasado menemista, identificado con la apertura indiscriminada de la economía, la exclusión social, la corrupción y el deterioro institucional.

Durante los primeros meses de su gestión, el presidente impulsó lo que dio en llamarse transversalidad. La ambigüedad del término da lugar a diferentes interpretaciones: desde el impulso a una coalición de centroizquierda hasta una nueva versión del movimientismo peronista que absorbería en sus filas, discursivamente renovadas, a amplios sectores de izquierda.¹⁸ Con el paso del tiempo, el impulso de la transversalidad se fue perdiendo, en la medida en que Kirchner necesitaba del respaldo parlamentario y político del justicialismo a su acción de gobierno. De todos modos, la experiencia electoral de la provincia de Misiones y, sobre todo, la elección de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires muestra la disposición del elenco gobernante a construir coaliciones al margen y hasta antagónicas a las estructuras formales del justicialismo.

Para las elecciones parlamentarias del 23 de octubre, Kirchner ha lanzado al ruedo una nueva formación política, el «Frente para la victoria», que expresa a las fuerzas, justicialistas o no, que apoyan su gestión de gobierno. La realidad es diferente según las provincias: mientras en algunas el aparato peronista apoya a los candidatos del presidente, en otras los enfrenta; no faltan algunos casos en los que los candidatos kirchneristas se reparten entre diferentes listas. Pero de todos los escenarios, sin duda el más interesante es el que se presenta en la provincia de Buenos Aires; es allí donde con la candidatura central de Cristina Kirchner, senadora y esposa del presidente, el oficialismo enfrenta a la candidatura de Hilda de Duhalde, esposa de quien fuera el apoyo decisivo para su consagración a la prime-

¹⁸ Francisco Gutiérrez, «La batalla crucial que librará el peronismo», *Clarín*, 18/06/2004.

ra magistratura, Eduardo Duhalde quien sigue expresando la estructura formal del Partido Justicialista en la provincia. La fractura peronista en Buenos Aires fue precedida por el desplazamiento de numerosos cuadros del aparato partidario duhaldista –entre ellos varios intendentes– a las filas del presidente. Es innegable que la escena de la provincia de Buenos Aires constituye una novedad muy importante para el peronismo y para el conjunto del sistema político partidario argentino. Dos años después de haber protagonizado el hecho inédito de presentarse a elecciones con tres candidatos diferentes y antagonicos entre sí, el justicialismo sufre una fractura en uno de sus bastiones principales.

Hegemonismo, enconos irreductibles e ingobernabilidad parecen las claves interpretativas predominantes sobre la actual crisis peronista. Cada una de ellas remite a períodos concretos de nuestra historia y al comportamiento del movimiento fundado por Perón en cada uno de ellos, desde la mirada de sus adversarios y sus críticos.

El hegemonismo remite al primer gobierno peronista signado por una extrema polarización política –cuyas resonancias siguen atravesando la cultura política argentina– y un avance manifiesto contra el pluralismo democrático, expresado en persecuciones de partidos y prensa opositora, así como una reforma constitucional de dudosa juridicidad y sin consenso parlamentario. Los partidarios de esta lectura entienden que detrás de la querrela bonaerense hay un intento por asegurar al PJ las tres bancas en juego en el distrito. La alusión a los enconos irreductibles, por su lado, invoca la virtual guerra civil que libraron sectores del movimiento situados en las antípodas ideológicas durante la década del setenta. Esta interpretación explica los hechos actuales por la supuestamente congénita falta de límites por parte del peronismo para dirimir sus diferencias. Por último, los temores por la gobernabilidad en el caso de una fractura en el justicialismo bonaerense se apoyan en la reciente experiencia del gobierno de la Alianza, explicada en clave conspirativa como el producto de desórdenes cuidadosamente planificados desde la principal provincia del país. La prudencia, según los adherentes de esta hipótesis, aconsejaría evitar la ruptura para aventar nuevas experiencias de inestabilidad y colapso institucional.

Cada una de estas miradas tiene cierto anclaje en los hechos de nuestra historia reciente y no tan reciente. Sin embargo, parecen tener en común dos problemas conceptuales: el relato de nuestra historia en términos excluyentemente «panperonistas» –y, con frecuencia antiperonistas– (exactamente simétricos al exaltado elogio de esa tradición que realizan algunos de sus adherentes) como si las tragedias argentinas se dejaran explicar sin el concurso de fuerzas ajenas y a veces violentamente enfrentadas al peronismo y, en segundo lugar, cierta prescindencia del significado y las proyecciones políticas de la crisis de fines de 2001.

En efecto, el colapso que entonces puso al país al borde de la desintegración pareció consumirse en el tiempo sin producir la esperable implosión del sistema político argentino. Los ecos de la crisis política siguen, sin embargo, condicionando la conducta de los actores. Las etiquetas partidarias que proveyeron un orden, aún precario, a la complicada transición posterior al colapso, difícilmente puedan, por sí solos, proveer la legitimidad necesaria a la democracia argentina en un futuro inmediato.

¿Significa la ofensiva bonaerense del presidente la expresión de una voluntad de reconfiguración del sistema de partidos en la Argentina o es una simple lucha de poder al interior del peronismo sin contenido de ideas y proyectos? ¿La división del peronismo significará la erosión de la gobernabilidad y la apertura de una nueva onda de inestabilidad política, o será la apertura del camino hacia un sistema de coaliciones partidarias capaces de plantear alternativas y de sucederse pacíficamente en el gobierno? Está claro que el presidente y el elenco gobernante tendrán una iniciativa decisiva en el rumbo de los acontecimientos. Todo indica que la elección del 23 de octubre significará una ratificación de la legitimidad del gobierno y una mejor situación de sus respaldos en el Congreso, aun cuando seguramente no alcanzará una mayoría propia en la Cámara de Diputados. De modo que se ampliará su capacidad de operación dirigida al desarrollo de una eventual nueva coalición de gobierno. La ruptura con las fuerzas que responden al ex presidente Duhalde abre, en el caso de proyectarse hacia el futuro, la posibilidad de que éstas se reagrupen —como lo han hecho en estas elecciones al concretar una alianza con la fuerza conservadora liderada por el ex comisario Patti— con las expresiones de centroderecha que salgan más fortalecidas en esta elección: la figura del empresario y dirigente de Boca Juniors, Mauricio Macri, de estrechos vínculos con el líder peronista de Buenos Aires, podría encarnar una parte importante de ese reagrupamiento. Aun así la hipótesis de un reagrupamiento político partidario en torno a dos coaliciones situadas a la derecha y a la izquierda del centro político tiene que someterse a la prueba de la práctica política. Para que ese rumbo se desarrolle, será necesario que las figuras más representativas de los sectores progresistas y conservadores consideren viable la construcción de fuerzas políticas independientes y a la vez capaces de establecer una interlocución inteligente con sectores afines del justicialismo sin demonizarlo en su conjunto ni subordinarse a él sumisamente.

El período que nos separa de la nueva elección presidencial en 2007 será, sin duda, decisivo para terminar de apreciar la potencialidad de cambio del sistema de partidos políticos argentino, después de la devastadora crisis que ha sacudido a todos sus actores.

Registro bibliográfico

MOCCA, EDGARDO

«El incierto futuro de los partidos políticos argentinos»,
ESTUDIOS SOCIALES. *Revista Universitaria Semestral*, Año
XV, N° 29, Santa Fe, Argentina, Universidad Nacional del
Litoral, segundo semestre, 2005 (pp. 9 - 24).

Descriptores · Describers

partidos políticos / crisis / continuidad / cambio / Peronismo
/ centroderecha / centroizquierda / elecciones / Kirchner

Political parties / crisis / continuity / change / Peronism /
center-right / center-left / elections / Kirchner